NOTA

Esta microficha contiene S/PV.390 y 391.

Las páginas de los documentos de S/PV.365 a 393 que aparecieron en un volumen, llevan numeración corrida.

Indonesia, o habían podido ser todavía reproducidos.

Además — y sea esto dicho de paso —, las observaciones que la Comisión había perdido que los Gobiernos de los Países Bajos y de la República de Indonesia transmitieran directamente al Consejo de Seguridad no nos habían llegado todavía. Los anexos del informe — más de cien páginas — no fueron distribuidos hasta la tarde del miércoles 15. En todo caso, cualquiera de los miembros del Consejo de Seguridad, inclusive la delegación de Australia, estaba en libertad de pedir la convocación de una sesión extraordinaria del Consejo, o simplemente la inscripción de la cuestión de Indonesia en el programa de una de las dos sesiones celebradas el 17 de diciembre.

Ningún miembro del Consejo, ni siquiera ninguno de los otros miembros de las Naciones Unidas — y esto se aplica también a Australia — consideró que debería asumir la responsabilidad de tomar tal iniciativa en nombre de su Gobierno. Además, antes de que se aplazara la sesión del 19 de diciembre por la tarde [*386a. sesión*], se expresó el deseo de que los miembros recibieran, en caso de una convocación urgente, un aviso previo con tres días de anticipación por lo menos. No se opuso objeción alguna a ese deseo, aunque todos y cada uno de los miembros estaban indudablemente al corriente de la solicitud del representante de la República de Indonesia.

Sin embargo, desde el primer momento en que, por la primera vez, repito, por la primera vez — en la noche del sábado 18 al domingo 19 —, un miembro del Consejo pidió que se convocara inmediatamente al Consejo, yo me mostré dispuesto a hacerlo, en caso necesario para ese mismo día, es decir, para el domingo por la tarde.

La sesión fué después aplazada para el lunes por la mañana, a base de los deseos expresados.

Estos son los hechos.

El representante de Australia ha criticado, igualmente, la actitud del miembro belga en la Comisión de Buenos Oficios. Me reservo el derecho de contestarle ulteriormente sobre este particular, no como Presidente del Consejo, sino como representante de Bélgica.

Sr. JESSUP (Estados Unidos de América) (*traducido del inglés*): Deseo plantear una cuestión de orden. Considero necesario formular una reserva en nombre de mi Gobierno, que no tiene la intención de criticar al Presidente. Quiero reservar expresamente la posición de mi delegación sobre la cuestión del establecimiento de un precedente en el Consejo de Seguridad, si éste decide que si un miembro del Consejo de Seguridad hace una declaración que no es impugnada por otros miembros, debe presumirse que los demás han aceptado esa declaración. Considero que es particularmente necesario hacer esta reserva en vista de lo que se acaba de decir. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas — en la misma sesión, creo — formuló algunas observaciones sobre el carácter de procedimiento o de fondo de una resolución sometida al Consejo de Seguridad. No creí necesario discutir la validez de los puntos de vista expresados por el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero deseo que conste en acta que mi delegación, por el hecho de no haber opuesto objeciones en ese momento, no aprobó en manera alguna la opinión enunciada por el representante de la URRS.

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Ahora podríamos interrumpir nuestras deliberaciones y reanudarlas, si los miembros lo desean, esta tarde a las 15 horas.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

391a. SESIÓN

*Celebrada en el Palais de Chaillot, París,
el jueves 23 de diciembre de 1948, a las 15 horas.*

Presidente: Sr. Fernand VAN LANGENHOVE (Bélgica).

Presentes: Los representantes de los siguientes países: Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, China, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, Siria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El orden del día es el mismo de la 390a. sesión (S/Agenda 390).

4. La cuestión de Indonesia (*continuación*)

A invitación del Presidente, el Coronel Hodgson, representante de Australia; el Sr. Desai, representante de la India; el Sr. van Roijen, representante de los Países Bajos; el Sr. Inglés, representante de Filipinas, y el Sr. Palar, representante de la República de Indonesia, toman asiento a la mesa del Consejo de Seguridad.

Sr. EL-KHOURI (Siria) (*traducido del inglés*): Los miembros del Consejo de Seguridad han recibido el documento S/1135, que es una comunicación dirigida al Presidente del Consejo de

Seguridad por el Secretario General de la Liga Árabe. Los miembros que han leído este documento se darán cuenta de la medida en que los Estados árabes se preocupan por la cuestión de Indonesia.

En primer lugar, los siete Estados de la Liga Árabe han reconocido ya la República de Indonesia. Este reconocimiento siguió a la firma del acuerdo de Linggadjati¹ celebrado entre la República de Indonesia y el Gobierno de los Países Bajos. En este acuerdo, el Gobierno de los Países Bajos reconoció la autoridad *de facto* de la República de Indonesia. Hemos considerado que, puesto que la Potencia a quien interesa principalmente este asunto, y la única con derecho a conceder existencia política a dicho Estado — el Gobierno de los Países Bajos — ya lo había hecho así, no podrían presentarse otras objeciones ni obstáculos al reconocimiento de la existencia

¹ Véase *The Political Events in the Republic of Indonesia*, Oficina de Información de los Países Bajos. Nueva York, página 34.

de la República de Indonesia por ningún otro Estado. La República de Indonesia fué reconocida dentro de las fronteras y de los límites definidos en el Acuerdo de Linggadjati, con todos los territorios y con la población allí existente.

Desde entonces, y aun un poco antes, se estableció un Gobierno en la República, que asumió toda la autoridad sobre el territorio incluido en ese Acuerdo celebrado entre los Países Bajos y la República. Dicho Gobierno ha estado ejerciendo su autoridad en cuestiones legislativas, de tribu, de mantenimiento de fuerzas militares y de la defensa del orden público dentro de su territorio, y todas las otras prerrogativas inherentes a la soberanía, excepto la de mantener representación diplomática en el extranjero. Todavía no ha hecho esto último.

El Gobierno de los Países Bajos declaró que se reservaba el derecho a continuar ejerciendo la soberanía hasta que los Estados Unidos de Indonesia se constituyeran en forma definitiva, pero aceptó también todas las prerrogativas que ha estado ejerciendo el Gobierno de la República de Indonesia y ha convenido en ellas. El Gobierno de los Países Bajos ha tenido conocimiento de todos los hechos ocurridos en Indonesia y, al mismo tiempo, ha celebrado ciertas Convenciones con la República, que indican que el Gobierno de los Países Bajos no tenía objeción alguna que hacer al hecho de que la República de Indonesia ejerciera tal autoridad. El Gobierno de los Países Bajos pactó una tregua con la República de Indonesia, y celebró otros acuerdos con la República además del Acuerdo de Linggadjati, para el arreglo de las controversias y de las diferencias existentes entre ellos.

Aun en el artículo XVII del Acuerdo de Linggadjati, el párrafo B declara que si existieren algunas diferencias de interpretación del Acuerdo entre las Altas Partes Contratantes, esas diferencias serían resueltas por medio de arbitraje, y declara también que la Corte Internacional de Justicia estaría autorizada para nombrar un presidente imparcial para este arbitraje. Parece claro, pues, que el Gobierno de los Países Bajos no se oponía a la independencia de la República de Indonesia ni a las prerrogativas de soberanía que la República ha estado ejerciendo desde entonces. Entre estas prerrogativas figura la de mantener la ley y el orden público dentro de sus fronteras, tarea que ha correspondido siempre al Gobierno de la República que ha estado ejerciendo hasta este momento.

Recientemente hemos celebrado una reunión extraordinaria [384a. sesión] del Consejo de Seguridad a solicitud del representante de los Estados Unidos de América [S/1128], en vista de la información recibida de que el Gobierno de los Países Bajos había reanudado las hostilidades y las operaciones militares en Indonesia, infringiendo el Acuerdo de Tregua y la Orden del Consejo de Seguridad de fecha 1º de agosto del año pasado (S/459). A ese respecto, nosotros deseábamos conocer, por conducto de nuestra Comisión de Buenos Oficios, la realidad de los hechos, y hasta qué punto eran verdaderos, así como las razones que se hubieran tenido en cuenta para reanudar las operaciones militares.

En nuestra primera reunión oficiosa sobre este particular, el Presidente del Consejo de Seguridad dijo que trataría de obtener información sobre este punto. Ha llegado esa información y ahora

posemos suficientes datos para saber en realidad qué pasó.

El Gobierno de los Países Bajos ha tratado de justificar la reanudación de las operaciones militares, según entiendo, por tres razones: [388a. sesión]. Dicho Gobierno ha considerado que esas tres razones le impusieron la necesidad o la obligación de recurrir a la fuerza.

La primera de estas razones era que el Gobierno de la República no quería o no podía cumplir los compromisos que le imponía el acuerdo de tregua [S/649, anexo XI] ni los que le imponían otros acuerdos concertados entre las partes. Esta es la primera razón expuesta por el Gobierno de los Países Bajos para justificar su intervención militar, pero, a mi parecer, no es válida, porque si una parte rehusaba o era incapaz de cumplir sus obligaciones, la otra parte no tenía derecho a recurrir a la fuerza de las armas para obligarla a cumplir sus compromisos. Hay otras maneras, como por ejemplo someter la cuestión al Consejo de Seguridad o remitirla a la Corte Internacional de Justicia para arbitraje, a fin de determinar si realmente la parte acusada rehuye cumplir las obligaciones que le imponen los tratados o es incapaz de hacerlo. La fuerza no es manera de obligar a una de las partes de una convención a que cumpla sus compromisos.

La segunda razón dada por el Gobierno de los Países Bajos fué la de que ciertos individuos se estaban pasando del territorio republicano al territorio que está bajo la dominación del Gobierno de los Países Bajos. El representante de la República de Indonesia nos ha hecho saber [389a. sesión] quiénes son las personas que se están infiltrando en el territorio que está bajo el dominio del Gobierno de los Países Bajos. Ha declarado que se trata de los habitantes de las áreas donde predomina la autoridad de los Países Bajos que, después de haber sido obligados a huir durante los desórdenes pasados, volvían a reunirse con sus mujeres y con sus hijos. Estos hombres no podían vivir durante mucho tiempo alejados de sus familias y se vieron obligados a regresar. Ya sea esta respuesta correcta o no, esta infiltración no justifica en forma alguna el uso de la fuerza contra la República por parte del Gobierno de los Países Bajos. Todo Estado tiene la obligación de proteger sus fronteras y de impedir que gente sospechosa o peligrosa entre en su territorio, sin que sea necesario recurrir a la guerra contra el país de donde aquella gente proviene. El deseo de impedir esas infiltraciones no justificaría de ninguna manera al Gobierno de los Países Bajos para atacar al territorio de la República. Un Estado está obligado a proteger sus propias fronteras, pero esto no le da ningún derecho para atacar al país vecino. La tercera razón dada por los Países Bajos fué la de que la ley y el orden público habían sido violados en el territorio de la República y que el Gobierno de los Países Bajos se había visto obligado a tomar una acción de policía para restablecer el imperio de la ley y el orden en esa zona. Esta razón es aún más difícil de aceptar como justificación de la actitud de los Países Bajos. El mantenimiento de la ley y del orden corresponde al Gobierno de la República. El Gobierno de los Países Bajos no tiene la responsabilidad de mantener la ley y el orden dentro del territorio de la República. Tiene que mantener la ley y el orden en los territorios que están bajo su jurisdicción, pero no hay nada en ningún acuerdo celebrado en el pasado

en que se diga que el mantenimiento de la ley y el orden estén a cargo del Gobierno de los Países Bajos. El Gobierno que fué reconocido por el Gobierno de los Países Bajos como la autoridad *de facto* en el país es, por sí mismo, el responsable del mantenimiento de la ley y el orden dentro de sus propias fronteras. Por consiguiente, el Gobierno de los Países Bajos no tiene facultad alguna para intervenir con fuerzas militares, ni para cruzar las fronteras ni para luchar, con el objeto de restablecer la ley y el orden en un territorio que no está bajo su jurisdicción. No veo cómo puedan restablecerse la ley y el orden por una fuerza extranjera en una zona en la que esa fuerza está rodeada de gentes hostiles que detestan su presencia y que siempre serán sus enemigos. La intervención militar solamente serviría para complicar y tal vez para empeorar la situación, y ser causa de que se deteriore la situación con respecto a la ley y al orden, especialmente cuando se sabe que tantos millones de gentes que allí viven no quieren a los que intervienen, no tienen confianza en ellos y están preparados a sacrificar sus propias vidas para deshacerse de su autoridad y de su dominio del país. En consecuencia, los medios utilizados para conservar la ley y el orden no pueden dar los buenos resultados que se preveían, sino que pueden producir un efecto adverso.

Entendemos que más tarde el Gobierno de los Países Bajos detuvo al Presidente del Gobierno de la República y a otras personalidades políticas, inclusive aun a los delegados que estaban negociando con él. Es ciertamente indigno de un invasor extranjero, que puede ser calificado de agresor, el arrestar al jefe de un Gobierno y reducir a la nada el orden y las instituciones de un país, deteniendo a las personas que tienen la responsabilidad de mantener el orden y de conservar el funcionamiento de los organismos gubernamentales. Por esta razón creo que la enmienda que fué sugerida esta mañana [390a. sesión] por el representante de Australia [S/1145] es adecuada, y mi delegación estaría dispuesta a apoyar su incorporación en el proyecto de resolución sometido conjuntamente por nosotros y por los representantes de Colombia y los Estados Unidos de América [S/1142].

El otro punto planteado por el representante de los Países Bajos se refiere a la competencia del Consejo de Seguridad y a los acontecimientos ocurridos cuando la primera resolución, la de 1º de agosto de 1947 (S/459), fué adoptada por el Consejo. Debemos decir que, aunque en aquel entonces, hace cerca de 19 meses, no tomamos una decisión positiva sobre la competencia o incompetencia del Consejo de Seguridad, si consideramos que la República de Indonesia ejercía parte de la autoridad y de las prerrogativas de soberanía en Indonesia; que los Estados Unidos de Indonesia serían establecidos posteriormente; y que la República de Indonesia, que había sido reconocida por el Gobierno de los Países Bajos en ese entonces, tenía el privilegio y el derecho de recurrir al Consejo de Seguridad para pedir una suspensión de las hostilidades y para que se le facilitaran los medios de mantener la paz dentro de su territorio. El Consejo de Seguridad estaba obligado, para evitar la efusión de sangre y la continuación de las atrocidades en Indonesia, a adoptar esa resolución, que fué ulteriormente aceptada por el Gobierno de los Países Bajos y por la parte contraria.

En seguida, después de la adopción por el Consejo de Seguridad de la resolución de 1º de agosto de 1947, se celebraron acuerdos de tregua. Ahora, después de 19 meses, durante los cuales este asunto ha estado sometido al Consejo de Seguridad, no es muy oportuno volver sobre la cuestión de competencia. Ahora no estamos decidiendo cuestiones referentes a la competencia. El Consejo de Seguridad tiene la obligación de actuar para mantener la paz y la seguridad dondequiera que la paz se halle amenazada en el mundo. El Consejo de Seguridad ha obrado así en otros lugares y su competencia no ha sido puesta en duda. El método para arreglar la controversia entre las partes fué aprobado por ellas mismas inmediatamente después de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Existía el acuerdo del "Renville" [S/649, anexo XI], que era muy claro y que fué aceptado voluntaria y cordialmente por ambas partes. Las disposiciones contenidas en ese acuerdo no han sido todavía agotadas y el Gobierno de los Países Bajos, como ha informado en varias ocasiones la Comisión de Buenos Oficios, no desea continuar las negociaciones en busca de una solución para las diferencias que existen entre las dos partes. El representante de los Países Bajos nos ha dicho que su Gobierno no tenía otra alternativa que la de ceder a la República, sacrificando todos sus intereses, o la de recurrir a la propia defensa y proteger sus intereses y las vidas humanas en Indonesia.

Creo que el representante de Australia, en el discurso que pronunció esta mañana [390a. sesión], ha hecho un excelente análisis de este punto especial y ha dicho ya la mayor parte de las cosas sobre las cuales yo tenía la intención de hablar. Indicó en su discurso, y yo habré de repetirlo, que había una tercera posibilidad, que era la correcta. Esa posibilidad habría satisfecho simultáneamente a las partes, al Consejo de Seguridad y a todo el mundo. Esa posibilidad era la de continuar las negociaciones a base del acuerdo del "Renville" y llevarlas a buen fin, y lograr los resultados concretos que deseaban ambas partes. Los Países Bajos declararon que estaban dispuestos, pero que el Gobierno de la República rechazaba la idea, pero nosotros tuvimos la impresión de que las concesiones y las fórmulas de transacción propuestas por el Primer Ministro de la República eran suficientes para demostrar la buena voluntad de la República con respecto a la reanudación de las negociaciones y para abrigar las mejores esperanzas de que los resultados no se harían esperar. La afirmación según la cual los Países Bajos no tenían otra alternativa que la de someterse o defenderse, no describe la situación de una manera exacta. El representante de los Países Bajos se empeñó en persuadirnos de que su país se hallaba en la misma situación que un hombre que se ve atacado por otro que quiere matarlo, y que no tenía otra alternativa que la de dejarse matar por su agresor o defenderse matando a su adversario. Sin embargo, no fué éste el caso. La República no tuvo la intención de pedirles a los Países Bajos que hicieran nuevos sacrificios. La República fué la que hizo todos los sacrificios, aceptó todas las transacciones e hizo todas las concesiones que era posible hacer en circunstancias semejantes.

Nosotros no podremos creer que sea correcto el uso de las palabras "acción de policía" para describir sucesos en los cuales cientos de miles de tropas armadas de una parte y otra se empeñan

en combate. Esto no puede considerarse como una acción de policía. Es simplemente una lucha entre las fuerzas armadas de dos Estados, exactamente como ocurre en cualquier guerra corriente en cualquier parte del mundo. Consideramos que en este caso el Consejo de Seguridad tiene la obligación de adoptar medidas inmediatamente para poner fin a este derramamiento de sangre. Estamos haciendo aquí discursos demasiado largos y esperábamos que el Presidente pediría a los representantes que evitaran repeticiones y que hablarán lo menos posible, para que pudiéramos llegar rápidamente a aprobar una resolución tendiente a hacer cesar las hostilidades en Indonesia, economizando los cientos de vidas que cada día — o quizás cada hora — se están sacrificando en ese país. Apoyo la enmienda de Australia al proyecto conjunto de resolución tal como fué presentada originalmente, y espero que completemos nuestra labor esta tarde, o a más tardar en otra reunión mañana, de manera que podamos adoptar una resolución para poner fin a la lucha feroz y cruel que se desarrolla actualmente en Indonesia.

Sr. DESAI (India) (*traducido del inglés*): Mi Gobierno ha seguido con honda preocupación los recientes acontecimientos de Indonesia. Esperábamos que pudiera llegarse a un acuerdo entre las partes, especialmente porque considerábamos que un arreglo justo, honorable y pacífico de la cuestión de Indonesia era indispensable para el mantenimiento de la paz y la tranquilidad no sólo en Indonesia sino en toda el Asia sudoriental.

La historia de las negociaciones que se han desarrollado entre el Gobierno de los Países Bajos y la República es larga y penosa. Una cosa, sin embargo, es evidente: durante las negociaciones, el Gobierno de la República ha hecho todo lo posible para comprender el punto de vista de la otra parte y para atenderlo, si podía y era compatible con su honor y dignidad y con las legítimas aspiraciones de su pueblo. Ningún otro Gobierno habría hecho lo mismo. Si fuera necesario demostrar esta aseveración, bastaría con recurrir a los informes de la Comisión de Buenos Oficios. Resulta claro de los informes que el Gobierno de la República no comenzó estas negociaciones con un espíritu de rencor ni de amargura o con la intención de reprochar a la parte contraria. Su única preocupación era la de hallar una solución al problema. Basta con mirar los informes de la Comisión de Buenos Oficios para darse cuenta de que la actitud de la otra parte no fué la misma e indudablemente no fué de tal naturaleza que ayudara a conseguir un arreglo.

Aun después de la ruptura de las negociaciones directas, el Sr. Hatta trató de nuevo de hallar una solución al problema. En una carta escrita por él el 13 de diciembre, dirigida al representante de los Estados Unidos de América en la Comisión de Buenos Oficios [S/1129], hizo aún nuevas concesiones. Esta actitud no indica un espíritu intransigente. Por el contrario, demuestra que el Sr. Hatta estaba inspirado por la idea de explorar todos los caminos posibles para hallar una solución pacífica. Se ha sugerido que las proposiciones contenidas en esta carta procedían del Sr. Hatta personalmente y no contaban con la aprobación de las autoridades de su Gobierno. Esta es una afirmación un tanto sorprendente. El Sr. Hatta ocupaba entonces el puesto de Vicepresidente del Gobierno de la República, y en realidad el Gobierno de los Países Bajos había estado nego-

ciando con él en ese carácter. Una personalidad tan eminente no iba a hacer esas declaraciones a la ligera y sin un completo sentido de su responsabilidad.

El Gobierno de la República estaba dispuesto a reconocer plenamente la soberanía del Gobierno de los Países Bajos. Estaba dispuesto a conceder al Alto Representante de la Corona poderes especiales en un estado de emergencia y autorizarle a utilizar tanto fuerzas federales como tropas de los Países Bajos para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Lo único que el Sr. Hatta pedía era cierta moderación, consentida voluntariamente por parte del Gobierno de los Países Bajos, en el ejercicio de su soberanía, y aun esto lo pedía en una medida limitada. En los sistemas modernos de gobierno democrático, tal moderación ha sido impuesta a menudo a los dirigentes de los Estados, y muy frecuentemente se la han impuesto ellos mismos. Por consiguiente, era perfectamente natural que el Sr. Hatta quisiera hacer valer ese argumento.

Esas fueron concesiones muy importantes hechas tratando de satisfacer el punto de vista de los Países Bajos. La respuesta del Gobierno de los Países Bajos, para decirlo en los términos más suaves, no fué ciertamente lo que razonablemente podía haberse esperado. Su respuesta definitiva, fechada el 17 de diciembre, fué de tal naturaleza, que el representante de los Estados Unidos de América se vió obligado a describirla en los siguientes términos: "No puedo, en justicia, pedir al Sr. Hatta que responda inmediatamente a una carta que, lejos de limitarse a la simple aceptación de reanudar las negociaciones, exige a su Gobierno que abandone su posición en todas las cuestiones esenciales [S/1129]".

Es significativo observar que, a pesar de que el Gobierno de los Países Bajos empleó cuatro días para enviar su propia respuesta, no quiso conceder más que unas horas para que el Gobierno republicano enviara la suya. Se trataba de cuestiones de gran importancia. No podía esperarse seriamente que Gobierno alguno pudiera contestar dentro de unas pocas horas. La carta no era una aceptación de las proposiciones de Indonesia para continuar las negociaciones, sino que era realmente un ultimátum en que se pedía al Gobierno de la República que accediera a todas las demandas del Gobierno de los Países Bajos. Si nos ponemos a considerar el cortísimo espacio de tiempo que se concedió al Gobierno republicano para que enviara su respuesta, así como el tono de la carta, inevitablemente llegamos a la conclusión de que el Gobierno de los Países Bajos había decidido renunciar a una solución negociada, y seguir un curso de acción totalmente distinto.

Después del fracaso de las negociaciones directas, si el Gobierno de los Países Bajos realmente hubiera deseado hallarle solución al problema podría haberse dirigido a la Comisión de Buenos Oficios pidiéndole su ayuda a ese respecto. En realidad, durante los últimos meses, no se ha recurrido a la Comisión de Buenos Oficios en busca de ayuda o de asesoramiento. Aun el Gobierno de los Países Bajos, en su declaración ante el Consejo de Seguridad [388a. sesión] rindió homenaje a la labor realizada por la Comisión y reconoció los esfuerzos que había hecho. Mi Gobierno quiere unirse al homenaje rendido a los miembros de la Comisión. Su sinceridad y la seriedad de sus intenciones han impresionado favorablemente a todos aquellos que han tenido

ocasión de observar sus trabajos. Su labor ha sido difícil e ingrata, pero a pesar de ello los miembros de la Comisión han tratado siempre de encontrar una solución. Entonces, ¿por qué no se ha apelado a la Comisión? ¿Por qué no se ha hecho esfuerzo alguno para hacer que la Comisión sirva para armonizar los divergentes puntos de vista de las dos partes? La respuesta es clara y no hay necesidad de buscarla demasiado lejos para encontrarla. El Gobierno de los Países Bajos había decidido arreglar la cuestión por la fuerza de las armas.

A la media noche del 19 de diciembre, los Países Bajos empezaron las operaciones militares. Según el informe de la Comisión de Buenos Oficios [S/1138], la denuncia del acuerdo de tregua no fué comunicada a la Comisión en su totalidad — y la Comisión no puede funcionar mas que como un todo — ni fué comunicada tampoco al Gobierno republicano. Esto constituye una violación flagrante del acuerdo de tregua.

El ataque comenzó simultáneamente en diversos puntos. La forma en que las tropas de paracaidistas y otras unidades militares entraron en acción demostró claramente que los preparativos militares habían sido hechos desde hacía mucho tiempo. Estos preparativos no pudieron haber sido hechos en el tiempo que medió entre la ruptura definitiva de las negociaciones y el comienzo de las acciones militares. Forzosamente tenemos que llegar a la conclusión de que el período de las negociaciones había sido utilizado en realidad para facilitar los preparativos militares.

La razón aparente que se ha dado para justificar la acción militar fué la de que se habían registrado violaciones del acuerdo de tregua, por parte del Gobierno republicano. A la comunicación entregada por la delegación de los Países Bajos el 18 de diciembre [S/1129] va anexa una lista de las supuestas infracciones. Es significativo observar en esa lista que después del 29 de octubre solamente se ha alegado una violación — el 24 de noviembre de 1948 — y que después de la fecha de esa supuesta violación habían comenzado las negociaciones entre los representantes del Gobierno de los Países Bajos y los del Gobierno Republicano. Es muy importante señalar que no se ha alegado violación alguna entre el período de la ruptura de las negociaciones y el comienzo de las hostilidades. El ataque comenzado por el Gobierno de los Países Bajos ha carecido por completo de provocación y, por consiguiente, de justificación. No hay absolutamente nada que demuestre que el Gobierno de la República tuviera intenciones militares de ninguna clase o que realizara preparativos militares. En realidad, los últimos informes de la Comisión de Buenos Oficios rechazan directamente semejante sugestión.

El otro motivo que ha invocado el Gobierno de los Países Bajos en su comunicación del 18 de diciembre [S/1129/Add.1] para justificar su negativa a continuar las negociaciones, es de tal naturaleza que realmente no merece comentario alguno. Sin embargo, deseo aludir a él porque contiene una referencia a mi Gobierno. Se ha sugerido que no había objeto alguno en proseguir las negociaciones, puesto que el Sr. Soekarno y algunos de sus ministros se habían dirigido, en viaje de visita a la India.

El hecho es que el Sr. Soekarno se proponía visitar la India para corresponder a una invitación que desde hacía ya mucho tiempo le había

hecho el Primer Ministro. El Sr. Stikker mismo ha admitido que el Gobierno de los Países Bajos había accedido a que el Sr. Soekarno hiciera esa visita. A fin de que el Sr. Soekarno pudiera hacer esa visita, el Gobierno de la India decidió enviar uno de sus aeroplanos a recogerlo. Antes de la partida del avión, se había informado adecuadamente al Embajador de los Países Bajos en Nueva Delhi. Sin embargo, el aeroplano fué retenido durante 48 horas porque las autoridades de los Países Bajos en Indonesia demoraron la expedición de los necesarios documentos de aduana. El permiso para la partida fué dado solamente unas pocas horas antes de que comenzara la acción militar emprendida por el Gobierno de los Países Bajos, y el aeroplano tuvo que volverse sin el Sr. Soekarno y sus colegas. Estos hechos hablan por sí mismos, y no se necesita ningún comentario adicional sobre la visita que se proponía hacer el Sr. Soekarno, que el Gobierno de los Países Bajos ha tratado de explotar a su favor.

El propósito de la acción militar, según los memorándum expedidos por el Gobierno de los Países Bajos, es el de establecer condiciones dentro de las cuales la población de Indonesia pueda decidir sobre la manera en que desea gobernarse a sí misma. Pero no puede comprenderse cómo puede existir una decisión libre del pueblo de Indonesia cuando a una parte muy considerable de esa población se la ha suprimido la libertad de expresión. Es imposible sugerir seriamente que pueda haber elecciones libres en Indonesia cuando el Gobierno Republicano ha sido aplastado militarmente y sus dirigentes han sido detenidos. La acción militar actual traerá forzosamente consigo una ola de amargura. Y esto no se limitará a las zonas controladas por el Gobierno Republicano, sino que se extenderá también a otras regiones. Ya están llegando informaciones sobre las renunciaciones presentadas por varios Gabinetes y sobre los desórdenes que se han registrado en varias partes del país.

Se ha sugerido que esta acción ha sido emprendida a fin de reprimir a ciertos elementos irresponsables. Es difícil de comprender, y mucho más de apreciar, este argumento, puesto que con esos elementos mismos ha sido con los que el Gobierno de los Países Bajos ha estado negociando, y si las negociaciones hubieran tenido éxito, dichos elementos habrían sido los miembros de un Gobierno responsable.

Si el Gobierno de los Países Bajos espera que mediante una rápida campaña militar puede suprimirse el Gobierno de la República se equivoca tristemente. El Gobierno republicano representa la voluntad de la población de Indonesia para conquistar la libertad. El pueblo de Indonesia ama la vida y la paz, pero más todavía ama a su libertad y a su honor. Está dispuesto a ver sus hogares destruidos y sus hermosas campañas convertidas en campo de batalla antes que renunciar a su libertad y a su honor. Su voluntad no se doblegará, y su espíritu no flaqueará. Hay un punto que no deja lugar a dudas: la solución final de este problema nunca se logrará mediante una acción militar.

El problema sometido a la atención del Consejo es de gran importancia. La lucha del pueblo de Indonesia por la libertad simboliza el espíritu que anima al Asia entera. En ese continente existe una tremenda efervescencia. Todos los días ocurren hechos de grandes consecuencias. Si este asunto no se resuelve rápida y efectivamente,

tendrá repercusiones muy amplias en ese continente. A nosotros no nos incumbe directamente esta cuestión. No tenemos designios secretos, pero ninguna Potencia en Asia puede sentarse tranquilamente a contemplar con serenidad o con indiferencia los acontecimientos de Indonesia. En consecuencia, mi Gobierno se halla hondamente preocupado con los últimos acontecimientos. Mi Gobierno ha estado siempre dispuesto a hacer todo lo posible por solucionar este problema. Mi Gobierno desea con ansiedad que se halle una solución, pero hace falta que sea una que proteja el honor del pueblo de Indonesia.

Ante todo, el Consejo debe ver qué medidas inmediatas debe tomar para hacer frente a la crítica situación actual. La Comisión de Buenos Oficios misma ha pedido instrucciones y que se obre prontamente. El Consejo debe obrar inmediata, decisiva y efectivamente. Mi Gobierno estima que el Consejo debería ordenar inmediatamente que cesen las hostilidades. Tal orden, sin embargo, no remediaría la situación. Debería también darse una orden para que las tropas holandesas se retiren a las líneas demarcadas por el acuerdo de tregua, como lo dispone el proyecto conjunto de resolución [S/1142]. Si no se expide tal orden, los Países Bajos podrían continuar reteniendo los territorios que han ocupado mediante su actual acción militar, inclusive la capital de la República, lo que equivaldría indirectamente a una aprobación de la agresión por el Consejo.

Estimamos también que debería disponerse que se pusiera en libertad a los dirigentes y a otras personas hechas prisioneras desde el principio de las hostilidades. Son los representantes del pueblo de Indonesia. Si la acción militar no se justifica, tampoco puede haber entonces justificación alguna para que continúe la prisión de esas personas. Insistimos urgentemente en que se agregue al proyecto de resolución una disposición en que se pida la liberación inmediata de los prisioneros.

La cuestión de la jurisdicción y de la competencia del Consejo para ocuparse de este asunto ha sido tratada a fondo por los representantes de los Estados Unidos de América, China, Australia y Siria. Nos adherimos a la opinión expresada por ellos.

Sr. J. MALIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (*traducido de la versión inglesa del texto ruso*): La cuestión de Indonesia ha continuado en el orden del día del Consejo de Seguridad durante cerca de tres años, y aunque se han dedicado por lo menos 60 sesiones del Consejo a su estudio, el problema todavía continúa sin solución. El Consejo de Seguridad no ha adoptado todavía, a propósito del problema de Indonesia, la posición firme y eficaz que permita poner fin a la agresión y defender de manera efectiva la paz y la seguridad.

Actualmente el Consejo de Seguridad discute de nuevo la cuestión del ataque realizado por las fuerzas armadas de los Países Bajos contra la República de Indonesia sin que mediara provocación alguna. No es la primera vez que el Gobierno de los Países Bajos ha cometido actos de agresión de esta naturaleza contra la República de Indonesia. La República de Indonesia, creada como resultado de la intensa lucha de liberación nacional del pueblo de Indonesia contra el imperialismo japonés, y proclamada y reconocida oficialmente el 17 de agosto de 1945, ha estado, durante sus

tres años de existencia, bajo la amenaza directa de agresión militar, primero por parte de las fuerzas armadas combinadas del Reino Unido y de los Países Bajos, y más tarde, a principios de 1947, por parte de las fuerzas armadas de los Países Bajos.

Como se sabe, el 25 de marzo de 1947, los Países Bajos y la República de Indonesia firmaron lo que se conoce con el nombre de Acuerdo de Linggadjati, mediante el cual los Países Bajos reconocieron el Gobierno de la República como un Gobierno *de facto* con jurisdicción sobre los territorios de Java, Sumatra y Madura. Así, se reconoció oficialmente que la República tenía un territorio de 605.000 kilómetros cuadrados, con una población de 57.000.000 de almas, y sin embargo, en julio de 1947, el Gobierno de los Países Bajos violó flagrantemente las obligaciones que había contraído bajo el acuerdo de Linggadjati. Las tropas de los Países Bajos atacaron sin provocación a la República de Indonesia. Como resultado de ese acto de agresión, capturaron casi dos tercios de la Isla de Java, toda la isla de Madura y una parte muy considerable de Sumatra alrededor de Palembang, Medan y Padang. Además importantes explotaciones petrolíferas de la isla de Java cayeron en manos de los agresores holandeses. La población de la República quedó reducida a unos 35 ó 36 millones.

El Gobierno de los Países Bajos ha tratado de persuadir a la opinión pública mundial de que su acto de agresión no fué sino "una acción de policía en una escala limitada". No obstante resultó perfectamente claro que aquellas operaciones no fueron nada más que un acto de agresión, cometido contra el pueblo de Indonesia por los Países Bajos, que es un Estado Miembro de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el Consejo de Seguridad no tomó medidas efectivas para poner término a la agresión holandesa, para defender los intereses del pueblo de Indonesia o para proteger su libertad e independencia. Las proposiciones hechas por el representante de la URSS durante la 172a. sesión del Consejo de Seguridad tendientes a que el Consejo adoptara una resolución sobre el retiro de las tropas de los Países Bajos a las posiciones que ocupaban antes del ataque contra la República, es decir, antes del 20 de julio de 1947, así como la proposición presentada en la 194a. sesión para que se creara una comisión compuesta de los representantes de todos los Estados Miembros del Consejo de Seguridad encargada de controlar la suspensión de las operaciones militares en Indonesia y el retiro de las tropas, fueron rechazadas. La proposición relativa a la creación de una comisión, como se recordará, no fué adoptada por el Consejo de Seguridad, debido al veto impuesto por el representante de Francia [194a. sesión].

Durante el examen de la cuestión de Indonesia en el Consejo de Seguridad, los representantes de ciertos Gobiernos hicieron todo lo posible para restar importancia a los acontecimientos ocurridos en Indonesia y para hacer que el Consejo adoptara una decisión sobre ese asunto, indudablemente inadecuada para proteger los legítimos intereses de la República de Indonesia, convertida en víctima de una agresión armada.

Como resultado de tal actitud de algunos Gobiernos, los representantes del Consejo de Seguridad adoptaron virtualmente la actitud de alentar al agresor. Las tropas de los Países Bajos

permanecían en el territorio que le habían usurpado a la República por medio de un ataque armado. El Consejo en vez de crear una comisión encargada de la solución del problema de Indonesia, creó la débil e ineficaz Comisión de Buenos Oficios [S/525 II], compuesta de representantes de los Estados Unidos de América, Bélgica y Australia. Como ha declarado en repetidas ocasiones la delegación de la URSS en el Consejo de Seguridad, esa Comisión realmente protegió, y sigue protegiendo, los intereses coloniales de los Países Bajos, y no puede actuar como juez imparcial para el arreglo de las controversias entre los Países Bajos y la República de Indonesia. Los acontecimientos ulteriores han venido a confirmar que esta manera de considerar la actividad de la Comisión de Buenos Oficios era correcta.

Con el apoyo de esa Comisión, los Países Bajos, el 17 de enero de 1948, impusieron a la República de Indonesia un nuevo Acuerdo, el llamado acuerdo de Tregua del "Renville" [S/649, *anexo XI*], según el cual las partes de la República ocupadas por las tropas de los Países Bajos quedaban sometidas a los Países Bajos. Los acuerdos celebrados a bordo del "Renville" contienen también, como base de las conversaciones entre los Países Bajos e Indonesia respecto de cuestiones políticas, los 12 principios políticos básicos y los seis adicionales propuestos por la Comisión de Buenos Oficios [S/649, *anexos XIII y VIII*].

A pesar de eso, inmediatamente después de la firma de los acuerdos del "Renville", el Gobierno de los Países Bajos comenzó a infringir las obligaciones que había contraído por ellos. Las autoridades coloniales de los Países Bajos, empleando a la Comisión de Buenos Oficios como una pantalla para ocultar sus acciones unilaterales contra la República de Indonesia, principiaron a celebrar plebiscitos ficticios en varios distritos de la República ocupados por los holandeses; a crear Gobiernos fantoches; a proclamar ciertas regiones Estados independientes, y a colocar a la cabeza de aquellos Estados ficticios regímenes títeres compuestos de lacayos holandeses y de traidores al pueblo de Indonesia.

Al mismo tiempo, y también como infracción al Acuerdo del "Renville", los Países Bajos reforzaron el bloqueo económico de la República. Las autoridades coloniales holandesas asumieron arbitrariamente el derecho de control unilateral del comercio exterior de la República, prohibiendo la importación de todo artículo al territorio de la República. Con el pretexto ridículo de que estaban tomando medidas contra el contrabando de guerra, prohibieron hasta la importación de agujas de coser. Simultáneamente, hicieron también imposible la exportación de artículos del territorio de la República, imponiendo un bloqueo por tierra y mar. Mediante el bloqueo de las costas de la República, las autoridades holandesas la aislaron completamente del mundo exterior haciendo así imposible el comercio con otros países. Tal acción no es más que una flagrante agresión económica contra la República de Indonesia.

Sobre este particular, además, tanto la Comisión de Buenos Oficios como el Consejo de Seguridad dejaron de tomar medidas efectivas para proteger los legítimos intereses de la República de Indonesia y de sus habitantes. Como se sabe, el Consejo de Seguridad en la 329a. sesión, se limitó a adoptar una resolución abstracta que no obligaba a nadie y de la que el Gobierno de los Países

Bajos hizo caso omiso al continuar, como lo ha hecho hasta hoy, imponiendo a la República de Indonesia su estricto bloqueo económico.

Este resumen, corto e incompleto, de la política adoptada por el Gobierno de los Países Bajos hacia la República de Indonesia, es necesario para comprender más claramente las razones de los siguientes acontecimientos que han conducido a un nuevo ataque, sin provocación alguna, por parte de las tropas de los Países Bajos contra la República de Indonesia, en violación tanto del Acuerdo del "Renville" como de la decisión del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Indonesia. Las negociaciones que se celebraron entre los Países Bajos y la República de Indonesia después de la firma del Acuerdo del "Renville" en la cual participó la Comisión de Buenos Oficios, no han producido resultado alguno. Es por demás obvio que aquellas negociaciones no pudieron producir resultados positivos de ninguna clase debido a la actitud adoptada por los representantes de los Países Bajos en Indonesia.

El Gobierno de los Países Bajos hizo cuanto estuvo a su alcance para hacer fracasar las negociaciones al proponer toda clase de condiciones injustas y al exigir cosas que la República no podía aceptar y, finalmente, triunfó al crear un *impasse* en las negociaciones.

En agosto de 1948, las autoridades coloniales holandesas en Batavia realizaron una incursión contra el edificio ocupado por los delegados de la República que habían venido a Batavia para proseguir las conversaciones políticas con los representantes de los Países Bajos. Dichas autoridades se apoderaron de los documentos de la delegación de la República y arrestaron a algunos de sus miembros. Mediante esa burda violación de la inmunidad personal y diplomática de la delegación de la República, los Países Bajos lograron el sabotaje definitivo de las negociaciones.

El Gobierno de la República de Indonesia quedó privado de la posibilidad de continuar las negociaciones con los Países Bajos porque el Gobierno de los Países Bajos rehusó garantizar la inmunidad diplomática de la delegación de la República. De esa manera el fin brusco de las negociaciones entre los Países Bajos y la República de Indonesia fué culpa del Gobierno de los Países Bajos y no se llegó a ningún acuerdo sobre las cuestiones políticas.

Todos estos actos arbitrarios, realizados por el Gobierno de los Países Bajos en violación del Acuerdo del "Renville", para perjudicar los intereses de la República y para debilitarla, ocurrieron a la vista de la Comisión de Buenos Oficios que, en realidad, simplemente servía de pantalla para ocultar dichos actos unilaterales y no tomó medida alguna para proteger los legítimos intereses de la República de Indonesia.

La Comisión por voluntad propia decidió prácticamente permanecer al margen de las negociaciones que se realizaban entre los Países Bajos y la República de Indonesia. Sus documentos demuestran que durante los pocos meses anteriores, desde mayo de 1948, no intervino prácticamente para nada en las negociaciones políticas entre los Países Bajos y la República de Indonesia.

¿Qué hizo la Comisión durante ese tiempo? De la declaración hecha por el representante de los Estados Unidos de América en esa Comisión

[S/1129] se deduce que él, en particular, estuvo ocupado durante muchos meses en cuestiones "oficiosas ajenas a las reuniones oficiales de la Comisión". Según sus explicaciones, con esa actividad se proponía inducir a las partes a que reanudaran las negociaciones. Pero la declaración hecha ayer por el representante de los Países Bajos [388a. sesión] aclara algo la naturaleza de aquellas actividades ajenas al trabajo de la Comisión misma. El representante de los Estados Unidos de América reconoció que la carta [S/1129] enviada el 13 de diciembre de 1948 por el Primer Ministro de la República de Indonesia, Sr. Hatta, al representante de los Estados Unidos de América en la Comisión, Sr. Cochran, para que fuera transmitida a la delegación de los Países Bajos, que en realidad constituía una capitulación ante las exigencias del Gobierno de los Países Bajos, fué escrita bajo la presión del Sr. Cochran mismo. Por esta actitud el Sr. Cochran recibió ayer las gracias del Gobierno de los Países Bajos por conducto de su representante.

Según las declaraciones del Sr. de Groot, hechas ante la Cámara de Diputados, el 25 de octubre de 1948, sabemos que el Sr. Ogburn, representante suplente de los Estados Unidos en la Comisión de Buenos Oficios, en una conversación con el Presidente Soekarno y con el Primer Ministro Hatta, a principios de julio de este año, en la población de Sarangan, en Java, pidió que el Gobierno dirigido por el Sr. Hatta comenzara una campaña contra los "rojos" y, para ese efecto, prometió poner a su disposición armas de los Estados Unidos de América e instructores norteamericanos.

De todos estos hechos resulta evidente que las actividades secretas del representante de los Estados Unidos de América en la Comisión de Buenos Oficios consistieron prácticamente, por una parte, en forzar al Gobierno de la República a hacer aún mayores concesiones al Gobierno de los Países Bajos y, por otra, en incitar al Gobierno republicano a suprimir las actividades de los patriotas democráticos indonesios que luchaban por la libertad e independencia de su país y de su pueblo.

Es evidente que tales actividades oficiosas por parte de miembros de la Comisión de Buenos Oficios minaban y debilitaban la existencia de la República, arrojándola así en manos de los agresores holandeses. De esa manera se alentó la política de agresión del Gobierno de los Países Bajos contra la República de Indonesia.

Tales actividades entre bastidores no podían, desde luego, contribuir al éxito de las labores de la Comisión de Buenos Oficios. El papel de la Comisión quedó así reducido, en el mejor de los casos, al de un mero organismo de registro de los acontecimientos y un transmisor de cartas y comunicaciones de una parte a otra, socavando así la autoridad del Consejo de Seguridad, en cuyo nombre se suponía que la Comisión de Buenos Oficios iba a trabajar. Digo "se suponía que iba a trabajar" porque en la práctica la Comisión actuó independientemente, considerando innecesario hasta informar al Consejo sobre las proposiciones políticas importantes que ella sometía a la consideración de ambas partes en su propio nombre. Así ocurrió, por ejemplo, en junio de 1948, cuando los representantes de los Estados Unidos de América y de Australia en la Comisión de Buenos Oficios sometieron sus proposiciones al estudio de las dos partes a base

de un acuerdo entre los Países Bajos y la República de Indonesia, en tanto que evitaba poner en conocimiento del Consejo de Seguridad aquellas proposiciones. Por todas estas razones fracasó la Comisión.

El Gobierno de los Países Bajos, habiendo logrado el sabotaje de las negociaciones con la República de Indonesia, no las reanudó realmente sino hasta el mes de noviembre. Según las noticias publicadas por la prensa internacional, este intervalo fué empleado por las autoridades de los Países Bajos en enviar contingentes adicionales de sus tropas a Indonesia y en prepararse para un ataque armado contra la República de Indonesia.

En septiembre último el Gobierno de los Países Bajos convocó a una conferencia conjunta de sus paniaguados indonesios, en la cual participaron los representantes de los regímenes títeres establecidos por los Países Bajos en varias partes de Indonesia. En esa conferencia, el Gobierno de los Países Bajos declaró su intención de proclamar oficialmente una Federación Indonesia, bajo el nombre de Estados Unidos de Indonesia, y la de crear un gobierno federal provisional.

Como se sabe, esa conferencia se celebró después del fracaso de las negociaciones con la República. No es necesario decir que el Gobierno de los Países Bajos emprendió esa acción con el propósito de ejercer presión política sobre la República. El Gobierno expresaba así oficialmente que, al crear lo que llamó los Estados Unidos de Indonesia y al formar un Gobierno federal provisional de aquellos Estados, compuesto de sus dirigentes títeres en Indonesia, pensaba hacer caso omiso de los intereses legítimos de la República y de las cláusulas del Acuerdo del "Renville" que preveían negociaciones políticas y la celebración de un acuerdo con la República como una condición indispensable para la solución de la cuestión de la estructura política de Indonesia.

Al mismo tiempo, las autoridades militares de los Países Bajos en Indonesia aumentaron su campaña de difamación y de propaganda subversiva contra la República de Indonesia. La "Oficina de Información Militar" creada por los holandeses arrojaban diariamente torrentes de mentiras y calumnias contra la República por medio de la prensa y de la radio, acusándola de supuestas violaciones del acuerdo de tregua. Como se sabe, el Gobierno de la República tomó todas las medidas posibles para observar estrictamente las condiciones de la tregua y para no dar al Gobierno de los Países Bajos ni el más ligero motivo de queja contra ella. Hasta podría decirse que el Gobierno de la República hizo concesiones excesivas, que a menudo tuvieron el carácter de una capitulación ante el Gobierno de los Países Bajos, alentando así a este último a presentar nuevas e injustificadas demandas que eran humillantes para la República. No teniendo razones o motivos para acusar a la República, las autoridades coloniales holandesas no pudieron recurrir a nada mejor que a acusarla por los desórdenes que ocurrían en los territorios ocupados por los Países Bajos.

La política colonial inhumana de las autoridades de los Países Bajos está provocando una indignación justa entre la población indonesia de los territorios ocupados por las tropas de los Países Bajos. Esa política de opresión colonial, de terror y de fuerza bruta aplicada a los patriotas indonesios, de explotación desvergonzada y de opre-

sión inhumana de la población, está provocando actos de indignación, demostraciones de insatisfacción, desórdenes y aun levantamientos de la población local contra el yugo colonial holandés. Las autoridades de los Países Bajos están tratando de echar la culpa, de lo que ellas denominan "desórdenes", al Gobierno de la República de Indonesia, acusándole de violar el acuerdo de tregua. Es evidente, para cualquier persona sensata e imparcial, que la causa de los llamados disturbios se debe a la política colonial de las autoridades de los Países Bajos y que el Gobierno de la República no tiene nada que ver con ellos. No hay duda alguna de que las mismas autoridades de los Países Bajos se dan perfecta cuenta de esto, pero que necesitan un pretexto para justificar su política hostil y agresiva hacia la República de Indonesia. Los actos del Gobierno de los Países Bajos ya mencionados suministran la prueba más clara posible de que ese Gobierno estuvo animado desde el principio, no del deseo de llegar a un acuerdo con la República, sino de intensificar las hostilidades contra ella.

En noviembre último el Gobierno de los Países Bajos envió a Indonesia una delegación con el ostensible propósito de reanudar negociaciones bilaterales con la República. Sin embargo, considerando las ya mencionadas medidas hostiles emprendidas por el Gobierno de los Países Bajos contra la República de Indonesia, y en vista también del hecho de que el Gobierno de los Países Bajos ni siquiera consideró conveniente invitar a la Comisión de Buenos Oficios — que se había dedicado a la defensa de los intereses coloniales holandeses en Indonesia — a que participara en esas negociaciones, resulta evidente que entonces el Gobierno de los Países Bajos tampoco pensó seriamente en llegar a obtener resultados positivos en sus negociaciones con la República de Indonesia. Esto quedó demostrado especialmente por la demanda incondicional del Gobierno de los Países Bajos de que las negociaciones principiaron con el examen de las llamadas violaciones de la tregua por la República, en tanto que rehusaba reanudar las negociaciones políticas previstas en el Acuerdo del "Renville".

En sus declaraciones oficiales, el Gobierno de la República ha rechazado más de una vez, calificándolos de calumniosos e infundados, los cargos de las supuestas violaciones del acuerdo de tregua, hechos contra la República por las autoridades de los Países Bajos. El Gobierno de la República ha sostenido, con toda justicia, el punto de vista de que el debate de las cuestiones corrientes relacionadas con la tregua no puede en forma alguna servir de obstáculo para la reanudación de las conversaciones políticas sobre la estructura del futuro Estado de Indonesia y sobre la celebración de un acuerdo político entre los Países Bajos y la República de Indonesia. En su deseo de eliminar todos los obstáculos que se presenten para la reanudación de las negociaciones, el Gobierno de la República propuso a las autoridades de los Países Bajos que se publicara un comunicado conjunto, para hacer un llamamiento a la población de la República y a la de las zonas ocupadas por las tropas de los Países Bajos para que se abstuvieran de ejecutar actos hostiles, para que cooperaran en evitar violaciones de la tregua, para que se abstuvieran de hacer circular informaciones que pudieran crear un ambiente desfavorable, etc. Las autoridades de los Países Bajos, sin embargo, rehusaron publicar tal comunicado

conjunto, y continuaron imputándole al Gobierno de la República violaciones de la tregua. Las negociaciones bilaterales, que principiaron entre los Países Bajos y la República de Indonesia en noviembre, quedaron interrumpidas por la delegación de los Países Bajos desde el 5 de diciembre. En el informe especial de la Comisión de Buenos Oficios, fechado el 12 de diciembre [S/1117] vemos que el Gobierno de la República "ha demostrado su buena voluntad y ha llegado a ofrecer concesiones al punto de vista de los Países Bajos". En el curso de las negociaciones, sin embargo, la delegación de los Países Bajos se limitó a presentar demandas que tenían el carácter de un ultimátum, e insistieron en que la República aceptara incondicionalmente las condiciones holandesas. Esas condiciones exigían que se dieran al representante de los Países Bajos en Indonesia derechos ilimitados y facultades extraordinarias, inclusive el mando único de todas las fuerzas armadas de los llamados Estados Unidos de Indonesia, lo que habría traído como consecuencia la casi absoluta liquidación de las fuerzas armadas de la República. El Gobierno de los Países Bajos pedía que el Gobierno de la República de Indonesia fuera privado de todos los derechos y facultades, quedando así la República misma reducida al nivel de un Estado títere del tipo usual, completamente subordinado a los representantes de los Países Bajos en Indonesia.

Por su parte, el Gobierno de la República presentó las cuatro condiciones siguientes, que son justas y más que modestas [S/1117/Add.I]:

1. Que el Gobierno provisional "tenga un carácter nacional y esté investido de poderes definidos";
2. Que los Ministros de este Gobierno provisional "sean personas que tengan un razonable sentido de la responsabilidad y sean conocidas en toda Indonesia";
3. Que el Gobierno provisional "se comprometa a observar los principios democráticos y a promover el desarrollo de la democracia entre la población";
4. Que el Gobierno provisional "sea responsable ulteriormente ante una asamblea constituyente".

La delegación de los Países Bajos, sin embargo, rechazó brutalmente estas legítimas y justas demandas de la República. Según el informe de la Comisión de Buenos Oficios, las conversaciones de noviembre demostraron muy claramente que el Gobierno de los Países Bajos intentaba establecer un Gobierno federal provisional antes del 1º de enero de 1949, sin participación de la República y sin realizar después negociaciones oficiales con ella. Esta política del Gobierno de los Países Bajos es una clara y directa violación de los compromisos que contrajo en el Acuerdo del "Renville". La declaración hecha por la delegación de que serían inútiles cualesquiera otras conversaciones con la República, aun con la intervención de la Comisión de Buenos Oficios, es un desafío directo al Consejo de Seguridad.

Todo esto es prueba evidente de que el Gobierno de los Países Bajos y los responsables de la política imperialista de agresión en ese país consideran que no tienen ningún interés en llegar a un acuerdo o en establecer relaciones normales y pacíficas con la República. Lo que desean es que no haya acuerdo y que no se restablezcan las relaciones normales, sino desarrollar negocia-

ciones tendientes a lograr un acuerdo que impida el acuerdo, echando la culpa a la República, y de esa manera "demostrar" la imposibilidad de un acuerdo y de la cooperación con la República. En última instancia el Gobierno de los Países Bajos necesitaba todo esto para ocultarle a la opinión pública mundial su agresión contra la República.

Los documentos adicionales sometidos al Consejo de Seguridad por los miembros de la Comisión de Buenos Oficios demuestran que en la noche del 17 de diciembre, el Gobierno de los Países Bajos presentó al Gobierno de la República, por conducto del representante de los Estados Unidos de América, lo que equivalía a un ultimátum humillante y, sin esperar respuesta, atacó a la República con sus fuerzas armadas en la mañana del 19 de diciembre.

Las tropas de los Países Bajos aterrizaron cerca de la capital republicana de Jogjakarta; arrestaron a los representantes oficiales de la República en Batavia, cometiendo así una segunda violación flagrante de los principios generalmente aceptados del derecho internacional, que garantizan la inmunidad diplomática de los miembros de las delegaciones extranjeras; y detuvieron a varios miembros del Gobierno republicano, principiando por el Presidente y el Primer Ministro.

Las fuerzas armadas de los Países Bajos están empeñadas en operaciones militares contra la República. Al mismo tiempo el Gobierno de los Países Bajos, en violación del Acuerdo del "Renville", ha expedido decretos unilaterales mediante los cuales se crea el llamado Gobierno Federal Provisional Interino de los Estados Unidos de Indonesia, del cual queda excluida la República de Indonesia. Estos actos del Gobierno de los Países Bajos pueden interpretarse solamente como actos de agresión contra la República. Este segundo ataque no provocado despierta la justa indignación de todos los pueblos decentes del mundo.

Estos actos del Gobierno de los Países Bajos significan nada más que el uso de la fuerza bruta, la violación deliberada y premeditada de un acuerdo concertado con participación de las Naciones Unidas, un desafío a la opinión pública mundial y un calculado y premeditado acto de agresión realizado en detrimento de las decisiones y de los principios de las Naciones Unidas. Esta es la única manera de describir tales actos, a base de la información contenida en el telegrama oficial [S/1138] de 22 de diciembre, dirigido por la Comisión de Buenos Oficios. Este documento muestra claramente que el Gobierno de los Países Bajos ha violado, de la manera más flagrante, los compromisos que le imponía el Acuerdo del "Renville", y revela que se había estado preparando durante mucho tiempo para una ofensiva militar contra la República, que no había sido motivada por una provocación, puesto que la República y sus fuerzas armadas habían cumplido absolutamente las condiciones de la tregua y no habían dado motivo alguno para una agresión armada por parte de los Países Bajos.

Es indudable que los colonizadores holandeses en Indonesia no han aprendido ni olvidado nada con respecto a su política colonial. No comprenden ni quieren comprender que la esclavitud colonial no puede ser impuesta por más tiempo por la fuerza de las armas a un pueblo que ha conocido los beneficios de la libertad y de la independencia.

Como todos los pueblos de Asia, que constituyen más de la mitad de la raza humana, el pueblo indonesio se ha puesto en movimiento. Cualquiera que intente obstruir este movimiento, en el cual juegan un papel cada vez más importante las fuerzas populares de liberación, es un enemigo declarado del progreso. Sin embargo, los enemigos del progreso no tendrán éxito en la labor de impedir la marcha progresiva de la historia.

La agresión colonial holandesa es un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales; compromete la cooperación internacional y descarga un nuevo golpe al prestigio y a la autoridad de las Naciones Unidas. Actos como éstos, cometidos por un Miembro de las Naciones Unidas, son incompatibles con los principios de esta Organización y representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo de Seguridad debe adoptar medidas rápidas y eficaces para proteger los legítimos intereses, la integridad y la independencia de la República de Indonesia. El Consejo no debe permanecer por más tiempo como espectador indiferente de los acontecimientos de Indonesia. Debe tomar inmediatamente las decisiones necesarias. Debe condenar la agresión cometida por el Gobierno de los Países Bajos.

La delegación de la URSS considera que las hostilidades deben cesar inmediatamente. El Consejo de Seguridad debe pedir que el Gobierno de los Países Bajos retire sus fuerzas a las posiciones que ocupaban antes de reanudarse las hostilidades, como primer paso hacia el arreglo de la controversia.

En vista de las intenciones y actos hostiles de los Países Bajos hacia la República, y en vista de la tensión de las relaciones entre ellos, la delegación de la URSS propone la creación de una comisión del Consejo de Seguridad, compuesta de los representantes de todos los Estados que son miembros del Consejo de Seguridad. Entre las funciones de la comisión figurará la de controlar la aplicación de la orden de cesar el fuego en Indonesia y del retiro de las tropas de los Países Bajos a las posiciones que ocupaban antes de reanudarse las hostilidades. La comisión deberá también ayudar a resolver toda la controversia entre los Países Bajos y la República de Indonesia.

La delegación de la URSS presentará un proyecto de resolución a este efecto. Considera que es urgente que el Consejo de Seguridad tome medidas resueltas contra la agresión holandesa en Indonesia.

Los esfuerzos hechos por el representante de los Países Bajos para justificar la agresión de su Gobierno contra la República de Indonesia fueron lastimosos y poco convincentes, y sus argumentos fueron artificiales y falsos. No se detuvo ante ningún método en su esfuerzo por acusar a la República. Hasta condena al Primer Ministro de la República por referirse en su discurso a la simpatía con que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ve la lucha de los pueblos coloniales por alcanzar su liberación nacional. Es indudablemente cierto que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su pueblo ven con simpatía el deseo de cualquier pueblo por obtener la libertad y la independencia, y que condenan y se oponen a todos los actos de agresión y a todos los intentos por impedir los movimientos de los pueblos coloniales en busca de su libera-

ción nacional y que les impongan la esclavitud colonial mediante el uso de la fuerza. ¿Pero acaso puede el reconocimiento que hizo el Primer Ministro de la República de este hecho, universalmente conocido, suministrar el Gobierno de los Países Bajos alguna razón para justificar su agresión contra la República de Indonesia? Todo esto demuestra hasta qué punto son falsos y superficiales los argumentos del representante de los Países Bajos.

Los intentos hechos por el representante de los Países Bajos para explotar en su favor la llamada "amenaza comunista" en Indonesia no se distinguieron por su novedad u originalidad. Esos argumentos fueron tomados del arsenal de propaganda de los fascistas alemanes y de los imperialistas japoneses, quienes, como sabemos, tenían la costumbre de ocultar sus actos de agresión cubriéndolos con gritos sobre "la amenaza comunista".

No son pocos los casos recientes que hemos visto en los cuales los agresores y los instigadores de la guerra han intentado encubrir sus siniestros actos con literatura de cuentos de hadas sobre la amenaza comunista. Tales cuentos de hadas, sin embargo, pueden engañar solamente a los muy ingenuos. No puede haber duda alguna de que los agresores holandeses fracasarán también en su intento de ocultar su agresión contra la República de Indonesia detrás del espantajo comunista.

Los agresores holandeses necesitan la propaganda anticomunista exclusivamente para utilizarla como una cortina de humo para encubrir la guerra colonial que han emprendido en Indonesia en su intento de destruir la República de Indonesia y de privar a la población de su libertad e independencia.

Las afirmaciones del representante de los Países Bajos de que el Consejo de Seguridad no es competente para discutir la cuestión de la agresión del Gobierno de los Países Bajos contra la República de Indonesia carece evidentemente de fundamento. La cuestión de Indonesia ha sido durante mucho tiempo un problema internacional, y el Gobierno de los Países Bajos no puede pretender convencernos de que se trata de una cuestión interna de los Países Bajos. El Gobierno de la República ha sido reconocido *de facto* por los Países Bajos, según los términos del Acuerdo de Linggadjati. El Consejo de Seguridad invitó al Gobierno de la República a que tomara parte en el debate sobre la controversia entre la República y los Países Bajos, reconociendo por ese mismo hecho que la República goza de iguales derechos como parte en esta controversia.

La República de Indonesia fué proclamada oficialmente en agosto de 1945 y posee todos los atributos principales de un Estado soberano independiente. Tiene territorio, población, un Gobierno, fuerzas armadas, etc. Sus relaciones con los Países Bajos han excedido los límites de una controversia doméstica y se han convertido en un problema internacional.

La agresión colonial holandesa contra la República es sin duda alguna un quebrantamiento de la paz y representa una amenaza para la paz y la seguridad internacional en toda el Asia oriental. Desde el punto de vista del derecho internacional se trata de un conflicto armado entre dos Estados y ninguna de las referencias hechas por el Gobierno de los Países Bajos a las llamadas medidas de policía puede alterar la naturaleza internacional

del conflicto. El Consejo de Seguridad está plenamente justificado y es competente para considerar la cuestión de Indonesia y para adoptar decisiones sobre el particular.

Deseo hacer unas cuantas observaciones acerca de la resolución presentada por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Siria y Colombia [S/1142]. De los documentos de que puede disponer el Consejo de Seguridad resulta completamente claro que el Gobierno de los Países Bajos cometió un acto de agresión al reanudar las hostilidades contra la República en violación del bien conocido Acuerdo del "Renville", celebrado el 17 de enero de 1948, con participación del representante de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad tiene derecho a llamar las cosas por su nombre, debe llamar a la agresión por su nombre real y condenar el acto agresivo del Gobierno de los Países Bajos.

El proyecto de resolución se refiere a la reanudación de operaciones militares en términos generales, pero no dice quién fué el responsable de que se reanudara. Se da la impresión de que las hostilidades fueron reanudadas por ambas partes simultáneamente, disimulando así el hecho incontrovertible de la agresión del Gobierno de los Países Bajos contra la República. No se condena en ninguna parte al Gobierno de los Países Bajos como agresor. La resolución invita a ambas partes a cesar la lucha y a retirar sus fuerzas. ¿Pero acaso las fuerzas republicanas atacaron e invadieron el territorio controlado por los Países Bajos?

En esa forma se ha tratado de evadir el fondo de la cuestión y los autores de la resolución tratan de crear la impresión de que cada una de las partes invadió el territorio de la otra, lo cual no se ajusta a los hechos. No es correcto dirigirse en términos idénticos a los Países Bajos y a la República de Indonesia para pedirles que cesen las hostilidades y que retiren sus fuerzas. Tal llamamiento debería dirigirse solamente a los Países Bajos en vista de que es la parte agresora.

La última cláusula del proyecto de resolución se limita a dar instrucciones a la Comisión de Buenos Oficios para que informe detallada y urgentemente por telégrafo para decidir qué parte es responsable de la reanudación de las hostilidades.

Semejante proposición es, por decir lo menos, extraña. Puede servir solamente para crear la falsa impresión de que el Consejo no sabe cuál fué la parte que realizó el ataque, y quién comenzó operaciones militares contra quién y cuáles fueron los acuerdos violados. Nadie puede negar, sin embargo, que el Consejo de Seguridad tiene suficientes documentos oficiales a su disposición para confirmar el hecho incontrovertible de que el Gobierno de los Países Bajos fué quien quebrantó la paz y cometió un acto de agresión contra la República de Indonesia. Para ver esto, basta con referirse a los últimos documentos recibidos de la Comisión de Buenos Oficios.

La declaración hecha por el representante de los Estados Unidos de América mismo no deja duda alguna respecto de cuál fué la parte que violó la paz, cuál tomó la ofensiva y, por lo tanto, se hizo la parte agresora. Esta cláusula de la resolución es, por consiguiente, no solamente innecesaria, sino perjudicial, puesto que les suministra una puerta de escape a los agresores holandeses, quienes podrían pretender que no se ha

demostrado todavía claramente quién es el responsable de la reanudación de las hostilidades.

En vista de esto, la delegación de la URSS no puede apoyar este proyecto de resolución.

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Ha llegado la hora de levantar la sesión. Podríamos proseguir este debate mañana a las 10.30 de la

mañana. El Secretario General Adjunto me acaba de hacer saber que, gracias al gran esfuerzo realizado anoche por los servicios técnicos, podremos disponer mañana por la mañana de un servicio limitado de interpretación simultánea.

Se levanta la sesión a las 19.30 horas.